



Proceso	Verbal
Demandantes	María Dolores Hincapié Pérez, Martha Judit Velásquez Hincapié, María Gloria Hincapié de Loaiza, María Sonia Hincapié Pérez, Luis Alberto Bravo Velásquez y Jahir Fernando Loiza Hincapié
Demandado	Nueva EPS S.A.
Radicado	05001 31 03 017 2020 00168 01
Procedencia	Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Oralidad de Medellín
Instancia	Segunda
Ponente	Juan Carlos Sosa Londoño
Auto	No. 062
Decisión	Confirma
Tema	<i>Amparo de pobreza y prueba pericial.</i> Por manera que, como el código del rito vigente impone que se allegue el dictamen pericial con la demanda, tal exigencia no lesiona los derechos de “acceder a la administración de justicia en igualdad de condición”, puesto que, precisamente el art. 152 permite que sea solicitado por el presunto demandante antes de la presentación de la demanda, y siendo así, abre la posibilidad de acudir a la práctica de prueba extraprocesal (art. (artículo 189 lb.), como que “La persona a quien se le ha concedido el amparo de pobreza no solo se le garantizará su derecho al acceso a la administración de justicia por medio de la designación de un abogado de oficio, sino que además no estará obligado a incurrir en los costos asociados al proceso previstos en el ordenamiento jurídico, lo cual es una protección adicional que obedece a la obligación social y estatal de solidaridad con las personas que se encuentran en situaciones de necesidad, como es el caso de aquellos con dificultades económicas graves que pueden poner en peligro su propia subsistencia y la de las personas a su cargo”. sentencia C-668

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
2023-060

SALA UNITARIA CIVIL DE DECISIÓN

Medellín, once (11) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Decide el Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de María Dolores Hincapié Pérez, Martha Judit Velásquez Hincapié, María Gloria Hincapié de Loaiza, María Sonia Hincapié Pérez, Luis Alberto Bravo Velásquez y Jahir Fernando Loaiza Hincapié en contra del auto del 30 de mayo último, proferido por el Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Oralidad de Medellín, dentro del proceso verbal que instauraron frente a la Nueva EPS S.A., mediante el cual se negó el decreto y práctica del dictamen pericial solicitado, por no haber sido allegado con la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. En el proceso enunciado, por auto del 30 de mayo último se fijó fecha para realizar la audiencia inicial y al mismo tiempo negó el decreto y práctica de la prueba pericial solicitada en la demanda por la parte actora, al considerar que debió ser acompañada con el libelo inicial, sin perjuicio del amparo de pobreza, en tanto, nada impedía su práctica como prueba extraproceso. (Archivo 50)

2. Inconforme con la decisión, la mandataria judicial de la parte actora interpuso recurso de apelación, manifestando en resumen que:

(i) No se fundamentó la decisión, ya que el art. 226 del C. General del Proceso se refiere a los requisitos del dictamen y “*no así, de la negativa de hacer uso de la peritación rendida por una entidad o dependencia oficial solicitada por el señor Juez*”.

(ii) Se desconoció el contenido del artículo 234 Ib. “*Existe la posibilidad de que de manera oficiosa o a petición de parte acuda a las peritaciones de entidades y dependencias oficiales para aquellas personas que no cuenten con recursos para presentar su dictamen pericial particular*”; y así se hizo en el escrito de demanda.

(iii) *La decisión del señor Juez de conocimiento de negar la prueba pericial, desatiende los principios básicos del sistema judicial colombiano, como son la gratuidad de la justicia y la igualdad de las partes ante la Ley*, a lo que agregó que el legislador creó la figura jurídica del amparo de pobreza “*cuyo fin principal es liberar a la parte de efectuar esos gastos que impedirían su defensa (SC-AL2871/20. Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral. M.P. Fernando Castillo Cadena)*”. (Subrayas del texto, archivo 51)

3. Concedida la impugnación vertical, el expediente fue remitido a la Corporación, la que decide lo pertinente, previas las siguientes;

II. CONSIDERACIONES

1. Sea lo primero señalar que no desconoce el Tribunal que

“El amparo de pobreza es una institución de carácter procesal desarrollada por el Legislador para favorecer a las personas que por su

condición socioeconómica no pueden sufragar los gastos derivados de un trámite judicial. De manera que esta figura se instituye legislativamente como una excepción a la regla general, según la cual, en las partes recae el deber de asumir los costos que inevitablemente se producen en el trámite jurisdiccional, para en su lugar, proteger a las personas que se encuentran en una situación extrema, representada en la carga que se les impondría al obligarlas a elegir entre procurar lo mínimo para su subsistencia o realizar pagos judiciales para el avance del proceso en el que tienen un interés legítimo. Con ello queda claro que el propósito del amparo de pobreza no es otro distinto al interés de asegurar que todas las personas puedan acceder a la administración de justicia en igualdad de condiciones y que, por ende, puedan ejercer los derechos de defensa o contradicción, sin que exista distinción debido a su situación socioeconómica.” (Sentencia T-339-18)

Sin embargo, frente a sus efectos, el inciso final del artículo 154 del C General del Proceso señala que *“el amparado gozará de los beneficios que este artículo consagra, desde la presentación de la solicitud”*, lo que debe entenderse como desde la etapa procesal en que se formuló la petición, en este caso desde la presentación de la demanda.

2. Lo que sucede es que, en punto a la prueba pericial, ha dicho la Sala de Casación Civil que;

«Ahora, es notorio que el tratamiento de la aportación, decreto, práctica y valoración de trabajo pericial regulado en el Código General del Proceso cambió frente a su antecesor (Decreto 1400 de 1970), pues en el derogado Código de Procedimiento Civil se había adoptado el dictamen judicial, en el que las partes lo solicitaban en el escrito de demanda o contestación y el juez lo decretaba para seleccionar de la lista de auxiliares de la justicia la persona que debía rendirlo, luego de lo cual, sucedía la contradicción mediante aclaración, complementación u objeción, para finalmente ser valorado en la sentencia, si era el caso.

“Nada de eso sucede en los tiempos que corren. A voces del artículo 227 de la Ley 1564 de 2012 la parte que pretenda valerse de una experticia deberá aportarla en la respectiva oportunidad. Esto es, el actor en su demanda (art. 82) o en el término para solicitar las

adicionales (art. 370), y el convocado con su contestación (art. 96); o, cualquiera de ellos, dentro del plazo especial del artículo 227» STC2066-2021.

3. Por manera que, como el código del rito vigente impone que se allegue el dictamen pericial con la demanda, tal exigencia no lesiona los derechos de *“acceder a la administración de justicia en igualdad de condición”*, puesto que, precisamente el art. 152 permite que sea solicitado por el presunto demandante antes de la presentación de la demanda, y siendo así, abre la posibilidad de acudir a la práctica de prueba extraprocesal (art. (artículo 189 lb.), como que *“La persona a quien se le ha concedido el amparo de pobreza no solo se le garantizará su derecho al acceso a la administración de justicia por medio de la designación de un abogado de oficio, sino que además no estará obligado a incurrir en los costos asociados al proceso previstos en el ordenamiento jurídico, lo cual es una protección adicional que obedece a la obligación social y estatal de solidaridad con las personas que se encuentran en situaciones de necesidad, como es el caso de aquellos con dificultades económicas graves que pueden poner en peligro su propia subsistencia y la de las personas a su cargo”*(Sentencia C-668 de 2016).

El otorgamiento desde antes del proceso permitía la utilización de los instrumentos que la misma normativa proporciona, por lo que el auto impugnando será confirmado, quedando a salvo la facultad oficiosa del juzgador de instancia frente a ese medio de prueba.

III. DECISION

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín en Sala Unitaria Civil de Decisión, CONFIRMA el el auto del 30 de mayo pasado, proferido por el Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Oralidad de esta ciudad, por lo dicho en la parte motiva de esta providencia.

NOTIFIQUESE

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO
Magistrado

Firmado Por:
Juan Carlos Sosa Londono
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Sala 001 Civil
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **5164733401af152da80a3518bba00a58299ab59c8db454857075513980c75c26**

Documento generado en 21/09/2023 08:41:56 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>